

La epidemia de los golpes de Estado en el Sahel

Coronel Carlos Latorre Darde

División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa (DICOES)

*«Allí donde el mando es codiciado y disputado
no puede haber buen gobierno y reinará la
discordia»*

Platón

EL golpe de Estado militar en Gabón se ha sumado a los numerosos derrocamientos de ese tipo en el continente africano durante el presente siglo. En concreto, de 2011 a 2019, se produjo menos de un golpe de Estado por año. Sin embargo, desde comienzos de 2020 hasta hoy, el número se ha elevado a ocho, de los cuales seis han dado como resultado un cambio de régimen político. La peor parte de la estadística se la lleva la región del Sahel. Guinea-Conakry, Burkina Faso, Malí, Níger y Sudan forman un cinturón de Estados, que abarcan desde el Atlántico hasta el mar Rojo, que se rigen actualmente por juntas militares.

A pesar de todo, no se puede concluir que el continente esté pasando por la etapa más violenta de su historia; no hay conflictos abiertos entre Estados y ninguna crisis actual es comparable, por ejemplo, con las dos guerras del Congo (la segunda de ellas llamada «Guerra Mundial Africana»), que fueron provocadas por las delimitaciones fronterizas durante los procesos descolonizadores (factor común a muchos de los conflictos africanos), o el genocidio de Ruanda.

Estos movimientos golpistas influyen, sin duda, en nuestro vecindario estratégico del Sur, y ponen de manifiesto lo poco maduras y desarrolladas que están las estructuras de gobernanza democrática en algunos países. Además, aflora la poca resiliencia que tienen esas sociedades ante las amenazas derivadas del cambio climático

(migraciones, hambre, sequía...), la economía (energía, desarrollo sostenible, financiación...), la sanidad (mortalidad infantil, enfermedades endémicas, pandemias...) y la seguridad (terrorismo, luchas étnicas, violencia intercomunitaria, rivalidad en la explotación de los recursos naturales...).

AYUDA AL DESARROLLO

El África subsahariana y, particularmente el Sahel, están adquiriendo mayor importancia geopolítica en la escena internacional y también en la política exterior española. España es proveedora de seguridad y su modelo está orientado a generar confianza en su entorno. Se articula en torno al Plan África III (2019) cuyos objetivos son promover la paz y seguridad, el desarrollo sostenible, el fortalecimiento institucional y una movilidad regulada, a través de la movilización eficaz de recursos de la sociedad española y de los países colaboradores, buscando una sinergia de esfuerzos.

El Plan supuso un cambio de paradigma a la hora de dejar de considerar la región como una mera receptora de ayuda al desarrollo, para tratarla de igual a igual. De hecho, se evalúan las enormes oportunidades que ofrece por su tamaño geográfico, abundancia de recursos naturales, grandes extensiones de tierra cultivable, juventud de la población, espectacular crecimiento demográfico y presencia de minerales críticos para la transición verde.

Asimismo, España se alinea con las políticas de la Unión Europea en la región. En el marco general de las relaciones entre la UE y África (Acuerdos de Cotonú y la Estrategia Conjunta África-UE), se ha establecido una estrategia regional con el área del Sahel, que se centra en cuatro ejes principales: el desarrollo, la buena gobernanza y la resolución del conflicto interno, la seguridad política y diplomática y el Estado de Derecho, y la lucha contra el extremismo violento.



Assane Quebraogo/ EFE

La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE colabora en esta estrategia con el desarrollo de estructuras marcadas por la Brújula Estratégica y el empleo del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Por ejemplo, el Consejo ha adoptado una medida de asistencia con cargo a este Fondo por valor de 11,75 millones de euros para apoyar a las Fuerzas Armadas de Benín. La medida se destinará, en particular, a apoyar la operación *Mirador* desplegada en las zonas septentrionales de Benín desde 2022.

El programa de inversiones de la UE *Global Gateway*, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, movilizará, entre 2021 y 2027, hasta 150.000 millones de euros destinados a África. Entre 2022 y 2024, el Fondo de Apoyo a la Paz proporcionará una ayuda a la Unión Africana (UA) de 600 millones de euros así como otros 20 millones más para la MNJTF (*Multinational Joint Task Force*) desplegada en la región del lago Chad en su lucha contra la organización yihadista *Boko Haram*. Otras iniciativas sobre el terreno, se articulan alrededor de misiones internacionales orientadas a reformas del sector seguridad (gobernanza, seguridad interior, defensa, sistema judicial, sistema penitenciario...) y de adiestramiento y equipamiento de unidades militares (misiones EUTM). El área del Sahel es, por tanto, un área prioritaria en todas estas medidas.

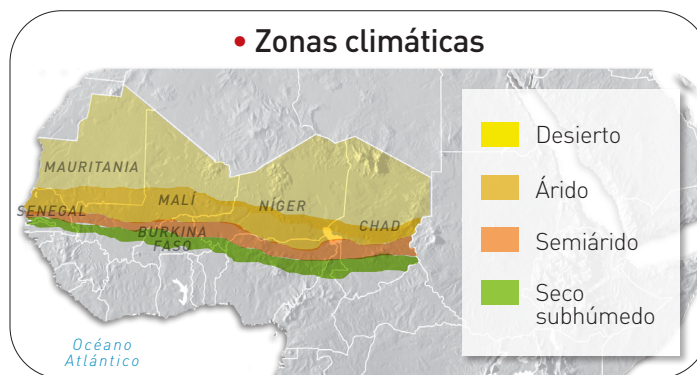
A pesar de estas ayudas a la seguridad y el desarro-

llo, la desafección internacional de los gobiernos africanos hacia el llamado primer mundo es creciente. Según la percepción africana, la reacción de Occidente ante la pandemia del COVID-19 ha sido insuficiente con África y la respuesta que se ha dado a Ucrania, apoyándola sin fisuras, nada tiene que ver con el escaso apoyo brindado a Estados africanos en crisis.

MAS TERRORISMO, MENOS DEMOCRACIA

El colapso del régimen libio en 2011 ha marcado un cambio en las dinámicas de los grupos terroristas de la región, proporcionándoles un rápido acceso a armamento pesado y capacidad de trasladarlo a través de las porosas fronteras del Sahel hacia las zonas de conflicto. Este lucrativo comercio ha desempeñado un papel crucial en el aumento de la violencia y el malestar social de la región, alimentando los conflictos, disputas intercomunitarias y el terrorismo. La proliferación de los tráfico ilícitos de armas ha fortalecido a los actores regionales armados, provocando un grave impacto en la seguridad de la zona. Además, los traficantes comparten rutas con las utilizadas por otros contrabandistas ilegales de bienes y con los movimientos migratorios internos.

Como consecuencia de ello, según el *Global Terrorism Index* (GTI), el Sahel se ha convertido en el epicentro mundial del terrorismo yihadista. Por tercer año consecutivo es la región del mundo con peores datos: en 2022 se han producido



Rafael Navarro/Fuente: ONU



Frederic Speich/EEF

2.270 atentados con 8.305 víctimas, una de cada tres víctimas mortales pertenece a esta área geográfica; el África subsahariana acumula el 72 por 100 de los atentados y el 75 por 100 de las víctimas, habiendo experimentado un aumento, respecto del año anterior, de un 58 y un 47 por 100, respectivamente. Malí y Burkina Faso han sido los dos países más golpeados por el terrorismo de las ramas territoriales del *Daesh* y de *Al-Qaeda*, con un 40 por 100 del total de atentados, seguidos por la cuenca del lago Chad, donde operan el grupo *Boko Haram* y organizaciones vinculadas al *Daesh*.

El otro aspecto transcendente a tener en cuenta es el nivel de consolidación de las estructuras democráticas. Según el *Ibrahim Index of African Governance* (IIAG), Libia, Malí, Níger, Nigeria y Benín se encuentran en el nivel más alto de deterioro de sus sistemas y únicamente Mauritania y Gambia tienen pequeñas tendencias positivas. En general, todos los Estados del Sahel (excepto Mauritania) suspenden en lo que respecta a la seguridad y al estado de derecho, aunque avanzan en la buena dirección las fundaciones de ayuda para ofrecer oportunidades de desarrollo económico (excepto Malí).

Esta situación de acciones terroristas crecientes y el deterioro de las estructuras democráticas es el caldo de cultivo perfecto para que se produzcan manifestaciones y revueltas sociales, particularmente violentas, contra los gobiernos, al no ser capaces de dar respuesta a las necesidades de seguridad y expectativas de futuro para la población, particularmente más joven. Esto incita a que, con frecuencia, grupos que pertenecen a las Fuerzas Armadas reaccionen alzándose

en armas y suplantando al poder político bajo la promesa de crear un entorno seguro, combatir eficazmente el terrorismo y facilitar el bienestar de la población.

La preocupación por la creciente inseguridad en África también tiene su reflejo en el Concepto Estratégico de la OTAN, aprobado en Madrid en 2022. En él se establece que los conflictos y la inestabilidad en África afectan directamente a la seguridad de los aliados y sus socios. La vecindad del sur de la OTAN se enfrenta a problemas interconectados de seguridad, demográficos, económicos y políticos, agravados por el impacto del cambio climático, la fragilidad de las instituciones, las emergencias sanitarias y la inseguridad alimentaria. Con este entorno se favorece la proliferación de grupos armados no estatales, terrorismo, instrumentalización de la inmigración, etcétera y se facilita la injerencia desestabilizadora de nuevos competidores estratégicos.

La tipología y motivación de cada uno de los golpes de Estado exitosos que se han producido en el Sahel es heterogénea. Su consolidación en el tiempo se ha producido por una aceptación social, que todos tienen como común denominador. La desvinculación de la población hacia sus gobernantes es evidente. Una mezcla de reivindicaciones soberanistas (la sola demostración de sentimientos anticolonialistas franceses hace aglutinar a buena parte de la población de los países con este pasado) y de hartazgo hacia regímenes democráticos con graves carencias, que no han sido capaces de proporcionar ni siquiera los servicios básicos, hace que las juntas militares se consoliden

con el tiempo. Las sanciones que la Unión Africana pueda imponer o la articulación de mecanismos para intervenir militarmente en el país tampoco parecen disuadir a los movimientos golpistas.

No se puede achacar toda la culpa a los responsables gubernamentales africanos. Sus gobiernos hacen lo que pueden y, en muchas ocasiones, no disponen de las herramientas necesarias. En palabras de Meles Zenawi, ex primer ministro de Etiopía, «gobernar un país en África es como correr frente a una avalancha» ya que, por un lado, la población demanda empleo, seguridad, educación, atención médica, etcétera, pero por el otro, no se dispone de mecanismos financieros para satisfacer esas necesidades. Incluso en los países ricos en recursos naturales, los sistemas de explotación proporcionan un beneficio casi en exclusiva a una minoría, al estar configurados normalmente por múltiples vertientes de concesiones a multinacionales, malversación y articulación de entramados empresariales en paraísos fiscales que, con frecuencia, se traducen en un auténtico expolio.

OTROS ACTORES INTERNACIONALES

En geopolítica, la ausencia de un actor provoca la incorporación de otro. En África, es sustantiva la presencia de Rusia y China que, con modelos diferentes, tratan de aumentar su influencia en la zona. La paradoja sucede cuando el lema de la UA «*African solutions for African countries*», que se aplica con rigor a las potencias coloniales y, por extensión, a todos los actores occidentales, no se aplica de la misma manera con otros. Rusia, en los aspectos de seguridad y defensa, y China, en las relaciones comerciales y de explotación de recursos naturales, proponen soluciones a los Estados africanos que, en la práctica, se traducen en injerencias en operaciones militares o en trampas de deuda impagables, que reducen la soberanía y autonomía de los gobiernos africanos.

Es especialmente significativa la creciente influencia del grupo ruso *Wagner* en el Sahel, que ha negociado acuerdos con Malí, República Centroafricana, Libia y otros. Son totalmente reveladoras en este sentido las declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, pocos días después de la rebelión del grupo ocurrida en el ámbito de la guerra de Ucrania el pasado junio, manteniendo que este «incidente» no afectaría al compromiso ruso con los países africanos.

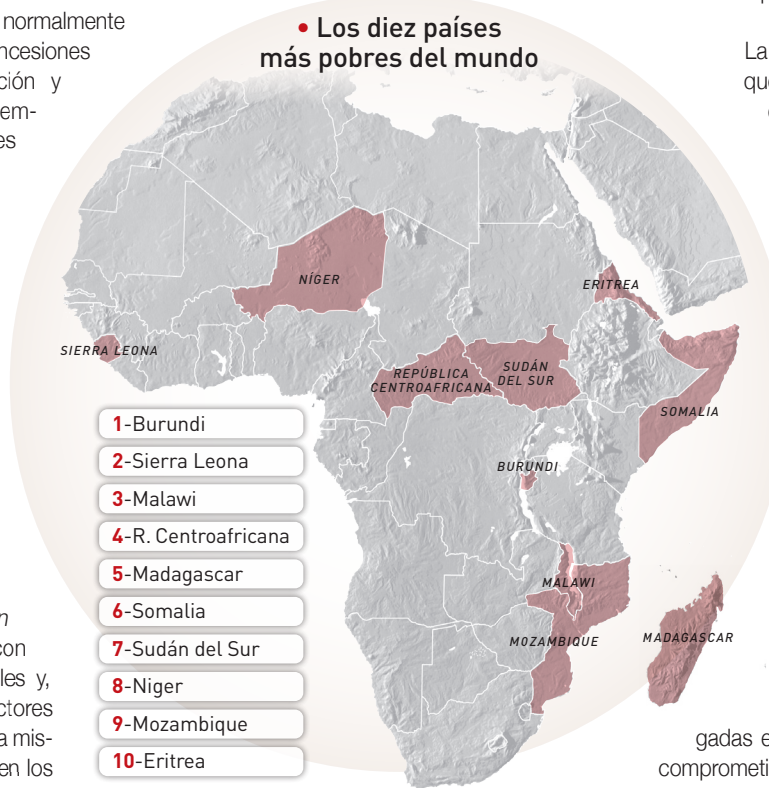
CONCLUSIONES

Organizaciones internacionales como la UE, la OTAN y la UA están muy preocupadas con el devenir del continente africano y tratan de tomar medidas para paliar el deterioro de la situación, algo en lo que también sus Estados miembros se muestran muy activos. Muestra de ello es la gran cantidad de actividades multilaterales y bilaterales que se realizan con los países del continente. Lo que ocurre en África y, especialmente, en el Sahel no nos es ajeno e influye muy directamente en un mundo globalizado e interdependiente. Las iniciativas son innumerables, pero queda todavía mucho por hacer. En este sentido, el principal reto es conseguir que el continente africano sea un lugar seguro y desarrollado, en el que la población goce de unos estándares aceptables de libertad y bienestar, y de razonables expectativas de futuro.

La comunidad internacional tendrá que realizar acciones a corto plazo que alivien el sufrimiento humano de la población, mientras que a medio y largo plazo, habrá que construir estructuras democráticas, dotándolas de autoridad e instrumentos financieros para que puedan orientar las políticas que permitan hacer frente a las diferentes crisis que sufren. De esta manera, también se evitará el apoyo social a las manifestaciones, revueltas y golpes de Estado que desestabilizan aún más las instituciones.

España, con tropas desplegadas en el terreno (Mali), se mantiene comprometida y expectante, esperando una oportunidad estratégica que permita, al menos, el diálogo. En ello nos ayudará, la empatía de nuestros soldados con la población local, el respeto a una cultura diferente, la promoción de la seguridad humana o nuestra propia experiencia en operaciones en el exterior.

Queda por preguntarnos, con respecto a la estabilidad de la gobernanza en los países del Sahel, si esta profusión de golpes de Estado corresponde únicamente a una epidemia pasajera que, por el momento, se contagia entre los países, o si, por el contrario, tenemos delante de nosotros otra rivalidad mundial entre sistemas de gobierno autocrático y democrático. Los primeros, más expeditivos y resolutivos en el corto plazo, ante problemas unidimensionales y los segundos, más resilientes y eficaces a largo plazo, ante problemas multidisciplinares.



Rafael Navarro/Fuente: FMI